



SENTENCIA

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTES	Delfin de Jesús Montoya Valencia
DEMANDADO	Colpensiones
RADICADO	05 001 31 05 017 2023 00050 01
TEMA	Reajuste pensional – cosa juzgada
DECISIÓN	Confirma sentencia.

Medellín, veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

En la fecha anunciada, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín procede a resolver dentro del presente asunto, en virtud del grado jurisdiccional de consulta dispuesto a favor de la parte actora. La Sala, previa deliberación, adopta el proyecto presentado por el magistrado ponente, que se traduce en la siguiente sentencia.

Pretensiones

Solicitó el demandante que se declarara que le asistía derecho a que su mesada pensional fuera reliquidada, conforme el Ingreso Base de Liquidación de los últimos diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, y, en consecuencia, que se condenara al reconocimiento y pago del reajuste en forma retroactiva, junto con los intereses moratorios previstos por el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en su defecto, la indexación de las sumas adeudadas.

Hechos

Relató que fue cotizante activo del sistema de pensiones desde el 2 de agosto de 1971, además de beneficiario del régimen de transición establecido por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 al haber nacido el 21 de febrero de 1948.

Señaló que Colpensiones mediante Resolución SUB 96521 de 2020, en cumplimiento de un fallo judicial, le reconoció pensión de vejez como beneficiario del citado régimen de transición, y en aplicación de los

artículos 12 y 20 del Decreto 758 de 1990, a partir del 1.º de diciembre de 2014, en cuantía equivalente al salario mínimo legal.

Refirió que presentó demanda contra Colpensiones y Porvenir S.A. con el fin de que se declarara la ineficacia de la afiliación al RAIS, y se dispusiera el reconocimiento de la pensión de vejez, correspondiendo a un asunto que fue decidido en forma favorable por parte del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

Mencionó que el 22 de junio de 2022 solicitó a Colpensiones la reliquidación de su medada pensional, ante lo cual obtuvo respuesta desfavorable mediante Resolución SUB 282899 de 2022, ante la presencia de la cosa juzgada, la cual precisa no se configura por no existir identidad del derecho reclamado ni ser idénticos los hechos sobre los cuales se funda la petición de reliquidación, máxime cuanto la mesada inicial se fijaría en \$1.348.762.

Contestación

Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, luego de lo cual aceptó todos los supuestos narrados, salvo los que planteaban la no presencia de la cosa juzgada, además de una mayor mesada pensional, frente a los cuales puntualizó no correspondían a verdaderos hechos.

Finalmente, presentó las excepciones que denominó: inexistencia de la obligación; cosa juzgada; inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993; buena fe; y prescripción.

Sentencia de primera instancia

El Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 15 de junio de 2023 decidió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR prospera la excepción de COSA JUZGADA propuesta por Colpensiones frente a las peticiones formulada por el señor DELFIN DE JESUS MONTOYA VALENCIA identificado con la C.C. 8.422.660, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: ABSOLVER a COLPENSIONES de todas las peticiones formuladas por el señor DELFIN DE JESUS MONTOYA VALENCIA, en concordancia con lo indicado.

TERCERO: CONDENAR en costas al demandante y a favor de COLPENSIONES, Se fijan las agencias en derecho en la suma de 1'000.000 PESOS. Por secretaria del despacho liquídense los gastos del proceso.

CUARTO: Se ordena remitir el expediente al H. TSM – SALA LABORAL, en el grado jurisdiccional de la CONSULTA por haber resultado adversa la decisión a los intereses de la parte actora.

Para llegar a esta conclusión, luego de señalar y explicar cuáles eran los presupuestos requeridos para que se configurada la cosa juzgada, se encargó de puntualizar que en el caso concretos estaban dados los elementos requeridos para su ocurrencia, en la medida que dentro de proceso judicial anterior había sido objeto de definición lo concerniente al monto de la mesada pensional, por lo que al corresponder a un aspecto ya definido por la judicatura, no podía volver a pronunciarse al respecto, máxime cuando no se evidenciaban elementos que implicaran un cambio factico de manera sustancial.

De igual manera precisó que en el cálculo que buscaba hacer valer la parte actora estaban incluidas semanas de cotizaciones hasta el año 2019, sin que pudieran ser valoradas en razón a que el disfrute se ordenó en sentencia judicial desde el año 2014, ordenándose además el pago de intereses moratorios.

Consulta

La decisión de primer grado no fue apelada por las partes, y en razón a ello se dispuso que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta a favor del demandante.

Alegatos

Vencido el término para la presentación de alegaciones, se pudo verificar que *Colpensiones* manifestó que no es posible proceder con la reliquidación pretendida en razón, en razón a que el reconocimiento de la pensión de vejez fue producto del cumplimiento de una sentencia judicial emanada de autoridad competente, decisión al interior de la

cual se realizó el cálculo de la mesada pensional y cuantificó un retroactivo, tratándose de un fallo debidamente ejecutoriado.

A continuación, explicó el alcance de la cosa juzgada, así como las razones por las cuales se aplicaba la figura al caso concreto, para finalmente solicitar que la decisión de primera instancia fuera confirmada.

CONSIDERACIONES

Se revisará la sentencia de primer grado en su integridad, teniendo en cuenta que el conocimiento por parte de esta corporación se presenta a partir de una decisión totalmente desfavorable al pensionado demandante, y que se ordenó que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta en su favor, de cara a lo previsto por el artículo 69 del CPTSS.

A efectos de resolver en esta sede, es importante tener en cuenta que la decisión de primer grado empezó su estudio con el análisis correspondiente a la excepción de cosa juzgada, por lo que al considerar que estaban dadas las condiciones para la prosperidad del medio exceptivo, no se prosiguió con el estudio, sino que se emitió una decisión absolutoria.

Conforme lo anterior, será la cosa juzgada el punto de partida de este cuerpo colegiado, en la medida que únicamente en el evento que se estime que, contrario a lo indicado por la *a quo*, no encuentra cabida la excepción, será posible abordar el estudio correspondiente al valor de la mesada pensional, y si procede o no el reajuste pretendido por el actor.

A partir de esta situación, es necesario verificar si se dan los presupuestos para que tenga lugar la cosa juzgada, que es consagrada en el artículo 303 del CGP, en los siguientes términos:

ARTÍCULO 303. COSA JUZGADA. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al secuestro en los demás casos.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

Debe recordarse, que uno de los efectos más relevantes de la institución de la cosa juzgada, es el saber que con ella se premia la seguridad jurídica, y de paso se reconoce la inmutabilidad de la decisión. Sobre el particular, puede verse lo expresado por el doctrinante Hernán Fabio López Blanco en su Obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil”, Editorial Temis, 3ª. Edición, pág. 325 y 326:

“En todo caso, repetimos, cualquiera que sea la posición que se adopte frente a la naturaleza jurídica de la cosa juzgada, es lo cierto que ella tiene estos importantes efectos:

1. Salvo precisas excepciones legales, impide volver a plantear las mismas pretensiones ante la autoridad judicial.”
2. Lo decidido en la sentencia no puede ser modificado ni siquiera por el mismo juez que la profirió; o sea, que la sentencia es inmutable.”
3. Si la parte a cuyo cargo se ha impuesto una prestación se niega a satisfacerla, se puede acudir a la fuerza para obtener su cumplimiento, aun cuando –y esto debe tenerse muy en cuenta- ese cumplimiento queda exclusivamente al arbitrio de la parte interesada, sin que pueda el Estado, a lo menos dentro de la actual situación de cosas, obtener, prescindiendo de la petición del interesado, el cumplimiento de la sentencia que dictó”.

En torno a la cosa juzgada ha sostenido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia CSJ SL3046-2020, lo siguiente:

En efecto, una decisión absolutoria ejecutoriada no pierde esa condición de inmutabilidad que le otorga el instituto de la cosa juzgada, por el simple hecho de que la parte interesada no obtenga el derecho que pretende o porque considere que existió alguna indebida valoración de las pruebas o no se contó con el material probatorio suficiente, pues lo cierto es que un juicio adelantado en esa forma, con todas las garantías propias del debido proceso, entre ellas la de aportar y controvertir las pruebas que den base al derecho reclamado, termina

definitivamente y representa una respuesta jurisdiccional intangible, que no puede revivirse indefinidamente según el capricho de las partes.

Esta sala de la Corte ha reivindicado la fundamental importancia del instituto jurídico de la cosa juzgada y ha resaltado, en dicha medida, que:

La institución de la cosa juzgada, con la que se delimita un derecho y se definió un conflicto, mediante una sentencia, tiene el carácter de inmutable, es imperativa y debe ser respetada por todos los sujetos procesales en orden a lograr la seguridad jurídica y la convivencia pacífica; no puede el recurrente, después de que se analizó y definió judicialmente una pretensión, con todas las garantías constitucionales y legales, pretender que se resquebraje el principio imperturbable de la cosa juzgada, buscando, un nuevo pronunciamiento que acceda a sus intereses. (CSJ SL, 10 feb. 2009, rad. 35327).

Igualmente, ha dicho la Corte que:

[...] la fuerza de la cosa juzgada --denominada también ‘res iudicata’-- se impone por el artículo 332 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los juicios del trabajo por virtud de la remisión a que se refiere el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, de las sentencias ejecutoriadas proferidas en procesos contenciosos, cuando quiera que el nuevo proceso versa sobre el mismo objeto (eadem res), se funda en la misma causa que aquél donde se profirió la sentencia (eadem causa petendi) y entre ambos hay identidad jurídica de partes (eadem conductio personarum -- eadem personae).

Razones de orden mayor imponen la necesidad de evitar ventilar nuevamente un mismo litigio cuando sobre éste ya se ha asentado de manera definitiva el pensamiento de su juzgador natural, por manera que, al tenerse por superada la controversia mediante la sentencia judicial en firme, ésta adquiere las características de ‘definitividad’ e ‘inmutabilidad’, que al lado de tener por solucionado el conflicto, otorgan a las partes comprometidas certeza del derecho discutido y seguridad jurídica sobre lo decidido.

Pero para que la cosa juzgada adquiriera la fuerza que persigue la ley, no basta que solamente una o dos de las identidades antedichas se reflejen en el nuevo proceso; como tampoco, para negarla, que por la simple apariencia se desdibujen los elementos que la conforman, esto es, el objeto del proceso, la causa en que se funda y los sujetos entre quienes se traba la disputa. Por eso, para que se estructure la cosa juzgada, de una parte, deben concurrir, necesariamente y en esencia las tres igualdades anotadas, y, de otra, deben aparecer identificados claramente los elementos que las comportan.

La cosa juzgada es una institución que por perseguir los objetos de certeza y seguridad jurídica anunciados, así como puede ser alegada por la parte interesada desde el mismo umbral del proceso a través de las llamadas excepciones previas que por sabido se tiene tienden a impedir el adelantamiento irregular del proceso, también puede ser declarada oficiosamente, aún en la segunda instancia, pues el artículo 306 del Código de Procedimiento Civil --artículo 282 del nuevo Código General del Proceso--, aplicable a los procesos del trabajo por la remisión de que trata el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que concede al juzgador dicha posibilidad, salvo

las consabidas restricciones respecto de la nulidad, la compensación y la prescripción, las cuales deben ser siempre alegadas, no puede entenderse derogado por la vigencia del artículo 66 A del código procedimental últimamente citado. Por manera que, en cuanto a dicha alegación no asiste razón alguna a los recurrentes, dado que, como se ha asentado, la cosa juzgada interesa al orden público y, por tanto, bien pueden los jueces de segundo grado declararla, aún, de oficio. (Sentencia CSJ SL, 23 oct. 2012, rad. 39366, reiterada, entre otras, en la CSJ SL17406-2014).

Finalmente, la Corte ha precisado que:

[...] no es dable confundir la causa petendí con las pruebas en que se apoya aquella, porque además de que la Ley se refiere es a la identidad de causa y no de medios, de aceptarse, cualquier controversia ya desatada y con los mismos supuestos fácticos, se podría reiniciar cualquier proceso con la aducción o aportación de nuevas pruebas, lo cual iría en contravía de la intangibilidad de las decisiones judiciales y de la seguridad jurídica que impone la cosa juzgada que a su vez confiere a las partes la certeza de haberse resuelto el conflicto en que se vieron comprometidas. (CSJ SL, 5 ag. 2004, rad. 22750).

Conforme lo dicho, es importante destacar que hay tres elementos que constituyen los límites de la cosa juzgada, los cuales han sido doctrinariamente definidos como objetivo, subjetivo y causal, entendiéndose:

- a. El subjetivo, como la identidad existente entre las partes del proceso, es decir, que a un nuevo juicio concurren como partes, las mismas que lo fueron en un juicio anterior.
- b. El causal, es aquello que da origen a la pretensión, o aquella sobre la cual se fundamenta la excepción, o sea, que para deducir la identidad de causa se debe mirar a los hechos estructuran la una o la otra.
- c. El objetivo, aquello que establece la relación jurídico - procesal, la cual se encuentra contenida o tipificada en el petitum o pretensión, es decir, que en un nuevo juicio se ventile como pretensión aquello que ya fue ventilado y decidido en juicio anterior.

Puntualizado lo anterior, es necesario estudiar si al comparar los dos procesos, es decir, el tramitado en su momento por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, y el conocido ahora por esta sala, confluyen o no los tres elementos propios de la cosa juzgada.

Para ello, se empieza por destacar las piezas procesales que resultan relevantes para decidir:

- El demandante accionó el aparato jurisdiccional en contra de Porvenir y Colpensiones a efectos de que se declarara la nulidad de la afiliación al RAIS, se tuviera vinculado a Colpensiones, y se condenara a esta última al reconocimiento de la pensión de vejez de acuerdo a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 12 del Decreto 758 de 1990 (Págs. 35 a 42 archivo 01 Demanda Unificada).
- En primera instancia obtuvo una decisión desfavorable por parte del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, al absolver a las demandadas presentadas en su contra (Págs. 45 a 47 archivo 01 Demanda Unificada).
- La decisión fue recurrida en apelación, y en razón a ello se emitió sentencia por esta corporación, quien revocó la decisión inicialmente adoptada, declaró la ineficacia de la vinculación al RAIS, además de lo cual impuso condena al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, cuantificando la mesada pensional en el equivalente al salario mínimo legal mensual vigente para cada anualidad, y liquidando el correspondiente retroactivo (Págs. 49 y 50 archivo 01 Demanda Unificada).
- A la mencionada decisión judicial se le dio cumplimiento por parte de Colpensiones mediante Resolución SUB 96521 de 2020(Págs. 55 a 63 archivo 01 Demanda Unificada), en donde quedó consignada la parte resolutive de la sentencia de segunda instancia de la siguiente manera:

"(...) Segundo: Se revoca la decisión de absolver a Colpensiones de las pretensiones de la demanda y en su lugar declara que el señor Delfín de Jesús Montoya Valencia con cédula 8422660 es beneficiario del Régimen de Transición tiene derecho a la pensión de vejez por acreditar los requisitos del Decreto 758 del 90.

Tercero: Se condena a Colpensiones a pagar la suma de \$48.623,726 por concepto de retroactivo pensional causado entre el primero (1) de diciembre del dos mil catorce (2014) y agosto del dos mil diecinueve

(2019), suma que incluye las mesadas adicionales de junio y diciembre. Cuarto: A partir de septiembre del dos mil diecinueve (2019) continuará pagando la mesada pensional equivalente a un salario mínimo con las dos adicionales de junio y diciembre, al momento de pagar el retroactivo se efectuarán los descuentos en salud correspondientes. Quinto: Se condena a Colpensiones al pago de intereses moratorios del Artículo 141 de la Ley 100 a partir del veintidós (22) de marzo del dos mil quince (2015) y hasta que se haga efectivo el pago del retroactivo. Sexto: Se condena a Colpensiones en costas en las dos instancias fijando como agencias en derecho en ésta a la suma de dos millones de pesos (\$2,000.000)."

- El demandante solicitó el 22 de junio de 2022 que se reliquidara la pensión de vejez (Pág. 64 archivo 01 Demanda Unificada), pero obtuvo respuesta negativa en la Resolución SUB 282899 de 2022 (Págs. 66 a 69 archivo 01 Demanda Unificada) al considerar la entidad que operaba la cosa juzgada.
- Obra en el expediente la transcripción de las decisiones emitidas en el primero de los asuntos, donde en lo que interesa a este asunto, se cita de la sentencia de segunda instancia lo siguiente (Págs. 355 a 364 archivo 06 Contestación Demanda):

Siendo así las cosas como se acredita el cumplimiento de los requisitos a la pensión de vejez se revoca la decisión de absolver para en su lugar condenar a Colpensiones al pago de la pensión, la pensión será de un salario mínimo de acuerdo con el valor de los IBC que el demandante hizo a lo largo de su vida y como el derecho se causa antes del 31 de julio del 2011 se condenará a pagar catorce mesadas, como la última cotización la hizo para noviembre del 2014 el retroactivo se concederá a partir del primero (1) de diciembre siguiente y la vamos a liquidar hasta agosto del dos mil diecinueve (2019) ordenando a la entidad que siga pagando la prestación en un salario mínimo a partir de septiembre del dos mil diecinueve (2019) en adelante, realizada la operación matemática y según el acta que aportamos a la o el cálculo que se aporta al acta el retroactivo liquidado hasta la fecha asciende a cuarenta y ocho millones seis veintitrés siete veintiséis (48.623.726).

Destacados estos elementos de prueba, se pasa a confrontar ambos procesos, para encontrar lo siguiente:

1. En cuanto al aspecto subjetivo, se encuentra que realmente en ambos procesos están involucrados los mismos sujetos como parte activa y pasiva de la relación procesal, es decir, figura como demandante el Sr. Delfín de Jesús Montoya Valencia, y como demandada Colpensiones.

2. En lo que respecta al aspecto causal también se encuentra identidad, pues en ambos asuntos se invoca la calidad de beneficiario del régimen de transición previsto por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y la remisión al Decreto 758 de 1990¹, y con base en ello se reclama sea cuantificada una pensión de vejez.
3. Objetivo: En cuanto al objeto, esto es, la pretensión, también se presenta identidad aun cuando no pareciera, pues si bien en el primero de los asuntos se reclamó pensión de vejez, y en el segundo un reajuste de la prestación, es claro que ambos implican la cuantificación de una mesada pensional, por lo que realmente hace parte de la litis la definición de un valor específico, que fue precisamente lo que se cuantificó en la decisión emitida en agosto de 2019, donde claramente se definió en principio la calidad de beneficiario del régimen de transición, luego, que se tenía derecho a la pensión de vejez, y, finalmente, se liquidó la pensión y el retroactivo entre el 1.º de diciembre de 2014 y agosto de 2019.

Conforme lo anteriormente expuesto, se estima que están presentes los tres elementos de la cosa juzgada, por lo que no se avizora error en la decisión de primer grado.

Ahora, aun en el evento en que se llegara a la conclusión de que no encuentra prosperidad la excepción de cosa juzgada, no sería posible acceder a la pretensión de reliquidación de la pensión en los términos solicitados, puesto que se busca que sean tenidos en cuenta Ingresos Base de Cotización hasta septiembre de 2019, sin que esto resulte posible al haberse definido el disfrute del derecho pensional desde diciembre de 2014, cuantificándose un retroactivo, e imponiéndose condena al pago de intereses moratorios, que incluso fueron objeto de

1 Véase para el efecto la demanda inicial (Págs. 35 a 42 archivo 01 Demanda Unificada), y el segundo libelo introductor (Págs. 7 a 19 archivo 01 Demanda Unificada).

Rdo. 05-001-31-05-017-2023-00050-01
169-23

un proceso ejecutivo laboral conexo, como consta en el expediente administrativo allegado por Colpensiones.

En este orden de ideas, se estima que no hay razones para variar la decisión adoptada en primera instancia, y contrario a ello, será confirmada en su integridad.

No se imponen costas procesales al conocerse el asunto en virtud del grado jurisdiccional de consulta.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Sexta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Medellín el día 15 de junio de 2023, dentro de proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por Delfín de Jesús Montoya Valencia en contra de Colpensiones EICE, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.

SEGUNDO: Sin costas en esta sede.

Se notifica lo resuelto por EDICTO. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación, se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los magistrados,



JUAN DAVID GUERRA TRESPALACIOS



MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'A' and 'M' followed by 'ZAPATA PÉREZ'. The signature is written over a horizontal line.

ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ